

ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA Y OTROS C/ BUENOS AIRES,
PROVINCIA DE s/ acción declarativa de certeza.



MONTI
Laura
Mercedes

Firmado digitalmente
por MONTI Laura
Mercedes
Fecha: 2022.10.04
11:59:57 -03'00'

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

La Asociación de Bancos de la Argentina, la Asociación de Bancos Argentinos, HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Banco Sáenz S.A. interpusieron, en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, acción declarativa de certeza contra la Provincia de Buenos Aires a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre y de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 94 del Código Fiscal provincial y de los artículos 437, 439 y concordantes de la disposición de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) serie "B" 1/2004 y sus modificatorias.

Manifestaron que la demandada considera que la parte actora debería haber practicado las retenciones del impuesto sobre los ingresos brutos al momento de acreditar fondos a cualquier sujeto que revista el carácter de contribuyente del referido impuesto en la Provincia de Buenos Aires y que se encuentre incluido en el "padrón de recaudaciones", independientemente de que la operación de la que se deriva esa acreditación haya tenido lugar fuera del ámbito territorial de esa provincia.

Expusieron que el bloque normativo impugnado conculca diversas normas y principios constitucionales (arts. 1°, 5° 7°, 9°, 31, 75, 121, 123 y 126); en especial, los límites territoriales que rigen el poder tributario provincial, al mismo tiempo que implica una invasión de facultades privativas y excluyentes del Banco Central de la República Argentina (art.

75, incs. 6°, 11, 19 y 32 de la Const. Nac., leyes 21.526 y 25.065 y art. 47 de su Carta Orgánica), la violación de los principios de igualdad y razonabilidad (arts. 16 y 28 de la Const. Nac.) y de la política nacional destinada a fomentar la bancarización (leyes 25.345 y 27.260).

Peticionaron como medida cautelar, en los términos de los arts. 230 y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se ordene a la demandada y/o a cualquiera de sus organismos a que: (i) suspendan los efectos y la ejecución del régimen de recaudación establecido en los arts. 437 a 443 de la citada disposición 1/2004, en cuanto las obligan a actuar como agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre los pagos efectuados por los tarjetahabientes en el marco de operaciones realizadas fuera del territorio provincial; (ii) se abstengan de iniciar y/o suspendan todo trámite o acción administrativa y/o judicial tendiente a exigirles que actúen como agentes de recaudación en el marco del "Régimen" con respecto a operaciones realizadas fuera del territorio de la Provincia de Buenos Aires; y (iii) se abstengan de cursar reclamos y/o instruir sumarios y/o de solicitar y trabar medidas cautelares y/o los potenciales responsables solidarios por la falta de actuación como agentes de recaudación en el marco del "Régimen" sobre operaciones realizadas fuera de la jurisdicción provincial.

En ese estado, se confirió vista digital, por la competencia, a este Ministerio Público.

-II-

Uno de los supuestos en que procede la competencia originaria de la Corte, prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58, se

ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA Y OTROS C/ BUENOS AIRES,
PROVINCIA DE s/ acción declarativa de certeza.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

da cuando es parte una provincia y la acción entablada tiene un manifiesto contenido federal, esto es, en los casos en que la pretensión se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales, en tratados con las naciones extranjeras y en leyes nacionales, de tal suerte que la cuestión federal es la predominante en la causa (Fallos: 315:448; 318:2534; 319:1292; 323:1716, entre otros).

A la luz de dicha pauta, observo que, según se desprende de los términos de la demanda -a cuyos términos se debe acudir de modo principal para determinar la competencia (Fallos: 312:808; 314:417 y 328:1979, entre otros)- las actoras ponen en tela de juicio el régimen de recaudación establecido por la Provincia de Buenos Aires para el impuesto sobre los ingresos brutos, en cuanto allí se designa a las actoras como agentes de retención de la mencionada gabela respecto de pagos efectuados fuera del territorio de esa provincia. Puntualizan que las exigencias establecidas en ese régimen a los agentes de retención se traducen en un ejercicio inconstitucional de las potestades tributarias (de recaudación) locales -más allá de los límites de su territorio-; y, a la vez, desconocen las facultades exclusivas del Congreso de la Nación y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para regular la materia bancaria. Como consecuencia de lo anterior, concluyen que las disposiciones aquí cuestionadas son violatorias de lo ordenado en la Constitución Nacional (arts. 1°, 5°, 7°, 9°, 16, 28, 31, 75, 121, 123 y 126) y de lo establecido en diversas normas federales (leyes 21.526, 25.065, 25.345 y 27.260); en especial, los límites territoriales que rigen el poder tributario provincial, al mismo tiempo que implica una invasión de facultades privativas y excluyentes del BCRA.

En tales condiciones, observo que, aunque la acción de certeza se dirige contra normas locales, la resolución del planteo esgrimido exige dilucidar si la demandada pretende ejercer sus facultades tributarias de modo tal que sean susceptibles de afectar la regulación de la actividad bancaria, que constituye una atribución del Gobierno Nacional (conf. art. 75, incs. 6°, 18 y 32 de la Const. Nac.), disposiciones de naturaleza federal cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la controversia y permitirá apreciar si existe la violación constitucional que aquí se alega (conf. Fallos: 326:880 y 2741; 330:2470; 331:2528).

Ello, desde mi punto de vista, implica que la causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución Nacional, a las que alude el art. 2°, inc. 1°, de la ley 48, ya que versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre las jurisdicciones locales y el Gobierno Federal que determina nuestra Ley Fundamental, lo que torna competente a la justicia nacional para entender en ella (Fallos: 315:1479; 329:3459 y 4394).

-III-

En razón de lo expuesto, opino que al ser parte una provincia en un pleito de manifiesto contenido federal, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de las actoras (Fallos: 317:473; 318:30 y 323:1716, entre otros), el proceso corresponde a la competencia originaria del Tribunal.

Buenos Aires, de octubre de 2022.